

**Puerto Montt, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.**

**Vistos:**

En autos Rit O-55-2020 del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, caratulados “Andrade con Fundación Almirante Carlos Condell”, en procedimiento ordinario por despido improcedente y cobro de prestaciones laborales, Rol Corte N°330-2020, la parte demandante representada por el abogado Ignacio Álvarez Vera, deduce recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva pronunciada con fecha 23 de octubre de 2020 que rechazó la demanda en todas sus partes, por estimar que se probaron en juicio los hechos de la carta de despido que justificaron el despido.

Invoca como causal de nulidad la del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, a saber, que la sentencia se habría dictado con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Señala que lo anterior influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que de no haber incurrido en las infracciones ya referidas, no se habría estimado que existió una justificación o motivación económica para reestructurar y despedir a los demandantes.

En segundo lugar y en subsidio, invoca como causal de nulidad la del artículo 478 letra d) del Código del Trabajo, esto es, que en el juicio habrían sido infringidas las disposiciones establecidas por la ley sobre intermediación o cualquier otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial expresamente. Sostiene que esto influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que de haberse dictado la sentencia en los plazos correspondientes, la sentenciadora no habría olvidado la prueba rendida o lo declarado por los testigos, en cuanto a que la empresa demandada tiene más de un colegio a lo largo del país, por lo que la argumentación de las cartas no cumple con el estándar requerido de fundamentación fáctica, debiendo haberse acogido la demanda.

En subsidio de las anteriores, interpone el presente recurso en virtud de la causal contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, en su segunda hipótesis, a saber, que la sentencia se habría dictado con infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, específicamente los artículos 457 y 161 inciso 1°, del Código del Trabajo. Entiende que, de no haber ocurrido dicha infracción, la sentenciadora habría acogido la demanda de despido injustificado.

Por lo anterior, solicita que se acoja el presente recurso por alguna de las causales interpuestas una en subsidio de la otra, anulando la sentencia impugnada y dictando una de reemplazo que acoja la demanda en todas sus partes; o bien, se

retrotraiga la causa al estado de celebrarse una nueva audiencia de juicio por juez no inhabilitado, con costas.

La vista del recurso de nulidad se efectuó en la audiencia del día 11 de marzo de 2021, con la comparecencia de las partes.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que como primer motivo de nulidad la parte demandante ha invocado la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, a saber, que la sentencia se habría dictado con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Para este caso, refiere que se habría vulnerado el principio lógico de identidad, por cuanto la carta de despido no contiene los fundamentos económicos que justifican el despido, y por lo mismo, no podría estimar la sentenciadora que el despido se ajusta al artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo. Agrega que también habría una vulneración a las máximas de la experiencia, cuando la sentenciadora razona que «es un hecho público que a nivel social país, cada año los colegios tienen una menor población de alumnos por baja matrícula o deserción» conclusión que sería errada.

Expresa que según el principio de la identidad, si una proposición es verdadera siempre será verdadera. La identidad de persona o cosa es la misma que se supone.  $A=A$ . Indica que la carta de despido de los trabajadores no contiene la fundamentación económica de la invocación de la causal de despido, lo cual incluso fue reconocido por el Director del establecimiento, tal como se consigna en la página 6 de la sentencia. Por su parte, la misma carta de despido no refiere a la situación económica general de la empresa que tiene una gran cantidad de colegios. Así, al no contener fundamentos económicos, se infringiría el principio de identidad al estimar la sentenciadora que el despido se ajusta al artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo. Concluye que de la simple lectura de la sentencia impugnada, es posible advertir que si se hubiese respetado el principio de identidad respecto de la ponderación de las cartas de despido y lo reconocido por el Director del establecimiento demandado, se habría estimado que las cartas no cumplen los requisitos del artículo 161 del Código del Trabajo y se habría acogido la demanda.

Respecto de la vulneración de las máximas de la experiencia y de la carencia de fundamentación económica, expresa que la sentenciadora, al final del Considerando Noveno, señala que «es un hecho público que a nivel social país, cada año, los colegios tienen una menor población de alumnos por baja matrícula o deserción». Dicha conclusión que sería una máxima de la experiencia de la Magistrado, es

totalmente errada, toda vez que es de público conocimiento que los Colegios particulares o particulares subvencionados incrementan anualmente su matrícula versus la situación de la educación municipal. Concluye que si no se hubiese infringido las máximas de la experiencia, no se habría asentado una situación errónea como la consignada al final del Considerando Noveno, y se habría estimado que no existió ninguna justificación o motivación económica para reestructurar y despedir a mis representados.

**SEGUNDO:** Que antes que todo resulta útil señalar que conforme a la demanda y las cartas de despido se da cuenta que los actores recibieron una misiva de aviso de termino del contrato de trabajo por necesidades de la empresa, la que señala que el contrato de trabajo terminaría el 29 de febrero de 2020, otorgándose el aviso con la anticipación correspondiente. El contenido de la carta es el siguiente: «El fundamento de la aplicación de la causal invocada, dice relación con el hecho que el Colegio, en pos de su proyecto educativo, ha racionalizado a su personal con los parámetros de la reestructuración que viene implementando para el año Escolar 2020. Damos cuenta que esta racionalización se debe principalmente a que nuestro Equipo de Gestión, luego de un largo proceso de análisis durante el año 2019 ha decidido que para mejorar la gestión institucional, reestructure la planta del personal para el año 2020 en el área que usted se desempeña reduciendo la cantidad de trabajadores y eliminando el cargo que usted ocupa por disminución de la matrícula del internado, dando cuenta además que sus funciones no serán reemplazadas».

**TERCERO:** Que el capítulo de nulidad denunciado por los demandantes, y que es objeto análisis, recae en la causal contemplada en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo: «Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica" y esto ha influido en lo dispositivo del fallo». El citado artículo 456 del Código del trabajo consagra el sistema de valoración de la prueba de la crítica razonada, es decir, que el sentenciador debe fundar en un razonamiento lógico la forma en que ha valorado la prueba, apreciando la prueba con libertad, pero no podrá contradecir los principios de la lógica, las máximas de las experiencias y los conocimientos científicamente afianzados. De modo que, al consagrarse el sistema de valoración de la prueba de la crítica razonada, el sentenciador debe fundar en un razonamiento lógico la forma en que ha valorado la prueba y, en ese sentido, la causal de nulidad invocada otorga al tribunal ad quem la facultad de revisar si este razonamiento se ha formado en base a la lógica, las máximas de la experiencia y los principios científicamente afianzados.

**CUARTO:** Que como lo ha sostenido reiteradamente este tribunal, la causal de invalidación invocada, artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, persigue evitar que se resuelva una contienda con manifiesta infracción a las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Según el artículo 456 del referido código, la sana crítica supone por parte de quien decide la explicitación de las razones jurídicas, de las simplemente lógicas, las científicas, las técnicas o de experiencia en cuya virtud asigne o no valor de convicción a las distintas probanzas rendidas legítimamente, para lo cual debe sopesar su multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión, al punto de dejar entrever que la conclusión que lo convenció es resultado de un análisis lógico.

**QUINTO:** Que en consonancia con lo anterior, incumbe a quien pretende asilarse en el motivo de nulidad esgrimido en autos, explicar precisa y claramente de qué manera el juzgador ha prescindido de los mandatos del sentido común, las máximas de experiencia, la lógica y el conocimiento universalizado, para arribar a la fijación de la situación fáctica que regula, no bastando la circunstancia de no ser compartido por el recurrente la ponderación de la prueba, el razonamiento efectuado y conclusión a que llegó la sentenciadora para invocar el supuesto de nulidad de que se trata.

**SEXTO:** Que, en primer término, el recurrente se asila para fundar este motivo de nulidad en una vulneración del principio lógico de identidad. Antes que todo debe precisarse que según el propio recurso: «si se hubiese respetado el principio de identidad respecto de la ponderación de las cartas de despido y lo reconocido por el Director del establecimiento demandado, se habría estimado que las cartas no cumplen los requisitos del artículo 161 del Código del Trabajo y se habría acogido la demanda». Aparece de manera prístina que lo reprochado es la ponderación de la sentenciadora con respecto de los medios de prueba, las cartas de despido y el testimonio del director del establecimiento educacional. Lo cual resulta improcedente porque, del tenor del libelo en estudio se advierte que la recurrente estima que con su prueba es suficientemente para estimar la acción intentada y, por lo mismo, no está de acuerdo con el análisis de la prueba que realiza la sentenciadora, es decir, no es que el fallo vaya en contra de la sana crítica, sino que se discrepa de la valoración de la prueba, cuestión que es ajena al presente recurso. En realidad, el recurrente pretende que esta Corte valore nuevamente la prueba, y su presentación más que un recurso de nulidad parece un recurso de apelación no contemplado por la actual legislación procesal laboral para una sentencia como la que se analiza.

**SÉPTIMO:** Que, sin perjuicio de lo expuesto, el principio de identidad significa que si una proposición es verdadera, siempre será verdadera, de modo que la identidad de la persona o cosa es la misma que se supone. Como ya se dijo, es deber del recurrente precisar claramente el principio lógico vulnerado y de qué forma se configura. En este sentido, el recurso no es preciso en señalar cuál es la proposición verdadera que después se desconocería por la jueza. No obstante, pareciera reprochar que en las cartas de despido no se contenga una fundamentación económica de la invocación de la causal de despido, pero que la sentenciadora sí las considere para estimar procedente el despido por necesidades de la empresa. Cuestión que de modo alguno puede representar una vulneración al principio de identidad porque la carta de despido sigue siendo una carta de despido para la juez a quo, cosa distinta es que la jueza considere justificados los hechos en que se basa la causal de despido. Al parecer la recurrente insinúa una vulneración al principio de congruencia, pero no es clara a este respecto, sin perjuicio que tampoco ello es así, según se verá en el próximo considerando.

**OCTAVO:** Que, con relación al considerando anterior, debe precisarse que la juez a quo brinda las razones en virtud de las cuales tiene por justificado el despido con relación a la carta de despido. En tal sentido el fallo impugnado en su motivo séptimo expresa: «Revisadas las cartas de aviso de término de contrato, se advierte que todas tienen el mismo argumento en cuanto a hechos fundamente de la causal de despido aplicada por el empleador, esto es, el artículo 161 inciso 1 del Código del Trabajo. En definitiva, los hechos se basan en dos ideas centrales que el demandado tiene el deber y la obligación procesal de probar. Por una parte (1) el Equipo de Gestión luego de un largo análisis en 2019, (2) que para mejorar la gestión institucional, (3) reestructura la planta del personal donde se desempeñan los actores para el 2020; y (4) que las funciones no serán reemplazadas». Luego la sentenciadora en los considerandos octavo y noveno se encarga de justificar en detalle cada uno de los puntos referidos para estimar procedente el despido. Una cosa distinta es que en ese ejercicio justificativo para acreditar el análisis que realizó la empresa, la necesidad de mejorar la gestión y la reestructuración se consideren pruebas que tengan un contenido económico. De modo que este motivo de nulidad no puede prosperar con base a este fundamento dado por el recurrente.

**NOVENO:** Que una segunda línea argumentativa para justificar el primer motivo de nulidad descansa en que la sentenciadora del grado habría vulnerado las máximas de la experiencia en cuanto en el motivo noveno de su fallo afirma que «es un hecho

público que a nivel social país, cada año, los colegios tienen una menor población de alumnos por baja matrícula o deserción». Si bien es correcto que esta afirmación no corresponde a una generalización empírica que permita considerarla como una máxima de la experiencia y que, más bien, se condice con un conocimiento privado de la jueza, no puede desconocerse que tal yerro es irrelevante porque es un argumento a mayor abundamiento y que si se suprime no altera las conclusiones a las que arriba el fallo. En efecto los considerandos octavo y noveno contienen un extenso análisis de los medios de prueba y las razones que llevan a la jueza a tener por acreditados los hechos de las cartas de despido y por desestimada la demanda. De este modo el yerro referido no reviste de la gravedad necesaria para acoger el recurso de nulidad por cuanto no ha influido en lo dispositivo del fallo, según lo previene el inciso penúltimo del artículo 478 del Código del Trabajo. Así las cosas, tampoco puede prosperar el motivo de nulidad con base a esta fundamentación.

**DÉCIMO:** Que en segundo lugar y en subsidio, se invoca como causal de nulidad la del artículo 478 letra d) del Código del Trabajo, esto es, que en el juicio habrían sido infringidas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial expresamente. Sostiene que esto influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que de haberse dictado la sentencia en los plazos correspondientes, la sentenciadora no habría olvidado la prueba rendida o lo declarado por los testigos, en cuanto a que la empresa demandada tiene más de un colegio a lo largo del país, por lo que la argumentación de las cartas no cumple con el estándar requerido de fundamentación fáctica, debiendo haberse acogido la demanda.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que con relación a este motivo de nulidad, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 425 del Código del Trabajo, cuyo inciso primero establece: «Los procedimientos del trabajo serán orales, públicas y concentrados. Primarán en ellos los principios de la inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe, bilateralidad de la audiencia y gratuidad». En este sentido, el principio de inmediación se erige como una garantía del debido proceso en materia laboral porque asegura que el Tribunal perciba directa y personalmente la producción de la totalidad de las pruebas durante la secuela de la audiencia de juicio. Esto con la finalidad de realizar un adecuado análisis de los hechos y subsecuentemente adquiera la certeza y la convicción necesaria para resolver el conflicto sujeto a su decisión. El principio en comento es desarrollado en dos disposiciones del Código del Trabajo. La primera es la

contenida en el artículo 427, que ordena que las audiencias se desarrollen en su totalidad ante el juez de la causa, el que las presidirá y no podrá delegar su ministerio. Dispone, además, la nulidad insanable de las actuaciones y de la audiencia ante el incumplimiento de lo por ella ordenado. La segunda es la establecida en el artículo 460, que dispone que si el juez que presidió la audiencia de juicio no pudiere dictar sentencia, aquélla deberá celebrarse nuevamente. Este principio, según las disposiciones señaladas, se cumple a cabalidad en el presente juicio porque la jueza a quo fue la que llevó a cabo el juicio oral, recibió directamente las pruebas y dictó sentencia.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que es efectivo que el juicio oral concluyó el 21 de septiembre de 2020 y que la sentencia es del 23 de octubre del mismo año, de modo que en su dictación se sobrepasó el plazo de 15 días que dispone el artículo 457 del Código del Trabajo. A este respecto el artículo señalado no establece una sanción de nulidad en caso que la sentencia fuere dictado fuera de plazo, como ocurre en materia penal conforme al artículo 344 del Código Procesal Penal que dispone la nulidad del juicio si la sentencia no es redactada dentro de los plazos que indica. De una parte resulta que en material laboral no está prevista la nulidad por dictarse la sentencia fuera de plazo y, por otra parte, el plazo para la dictación de la sentencia no se encuentra contenido dentro principio de inmediación por no decir relación con el contacto directo del juez con las partes y las pruebas. Además no se cumple con el requisito que el vicio influya substancialmente en lo dispositivo del fallo, en la medida que la disposición no se relaciona con el sustento normativo de las acciones intentadas, de modo que la juez dentro o fuera de plazo hubiera dictado la misma sentencia. De esta forma el segundo motivo de nulidad no puede prosperar.

**DÉCIMO TERCERO:** Que en subsidio de las causales anteriores, se interpone el presente recurso en virtud de la causal contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, en su segunda hipótesis, a saber, que la sentencia se habría dictado con infracción de ley que influyó substancialmente en lo dispositivo del fallo, específicamente los artículos 457 y 161, inciso 1°, del Código del Trabajo. Entiende que, de no haber ocurrido dicha infracción, la sentenciadora habría acogido la demanda de despido injustificado.

Con relación a la infracción del artículo 457 del Código del Trabajo, señala que la sentencia de autos se dictó casi a los 30 días del término de la audiencia de juicio. Dicha circunstancia infringe flagrantemente el artículo 457 del Código del Trabajo que establece: «Art. 457. El Juez podrá pronunciar el fallo al término de la audiencia de

juicio o, en todo caso, dictarlo dentro del plazo de décimo quinto día, contado desde la realización de ésta, en cuyo caso citará a las partes para notificarlas del fallo, fijando día y hora al efecto, dentro del mismo plazo». Agrega que si se hubiese dictado la sentencia en los plazos correspondientes, la sentenciadora no habría olvidado parte de la prueba rendida, como lo declarado por los testigos referente a que la empresa demandada no sólo tiene un Colegio en Chiloé, sino que una gran cantidad a lo largo del país. Ello obviamente habría conllevado a entender que las cartas de despido no cumplen con el estándar requerido en la fundamentación fáctica de la causal de desvinculación; razón por lo cual se habría acogido la demanda de autos.

En lo tocante a la supuesta infracción del artículo 161, inciso primero, del Código del Trabajo, expresa que la carta de despido de los trabajadores que represento no contiene la fundamentación económica de la invocación de la causal de despido, lo cual incluso fue reconocido por el Director del establecimiento, tal como se consigna en la página 6 de la sentencia. Por su parte, la misma carta de despido no refiere a la situación económica general de la empresa que tiene una gran cantidad de colegios. Así, al no contener fundamentos económicos, se infringe el principio de identidad al estimar la sentenciadora que el despido se ajusta al artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo.

**DÉCIMO CUARTO:** Que interpuesta la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en su segunda hipótesis, los hechos establecidos en la sentencia resultan inamovibles para esta Corte y, consecuentemente, el recurrente los acepta, pero cuestiona el razonamiento jurídico realizado por el sentenciador, estimándolo errado, sea por no aplicar una norma debiendo haberla aplicado, sea por aplicar una norma en forma indebida, sea por la errada interpretación de dicha disposición legal. Como lo ha señalado esta Corte, este motivo de nulidad concierne entera y exclusivamente a la revisión del juzgamiento jurídico del caso o, lo que es lo mismo, al «juicio de derecho» contenido en la sentencia. Los errores se pueden encontrar bajo distintas premisas, a saber: contravención formal del texto de la ley; falta de aplicación; aplicación indebida por una interpretación y aplicación errónea. La misión asignada por el ordenamiento jurídico al Tribunal de nulidad está en discernir cuál de esos significados o aplicaciones susceptibles de elegir es el mejor que se ajusta a la correcta y justa solución del caso. Por lo tanto, cuando se impugna una sentencia a través de esta causal, la restricción inevitable para el recurrente, es la de respetar los hechos que se han tenido por probados en la sentencia, porque su único objeto es revisar el juzgamiento jurídico del caso. En consecuencia, no se puede por vía de esta causal invocada, modificar los



hechos, como tampoco eliminar hechos o agregar otros distintos, sino que, a la luz de los antecedentes fácticos establecidos en la sentencia, debe determinarse si la norma fue aplicada en forma correcta a dichos hechos.

**DÉCIMO QUINTO:** Que con respecto a la infracción al artículo 457 del Código del Trabajo, al momento de descartar el segundo motivo de nulidad se justificó que el exceso de días para la dictación de la sentencia no dice relación con el principio de inmediación, su incumplimiento no tiene aparejada una sanción legal y no influye substancialmente en lo dispositivo del fallo. De modo que se estará a lo ahí señalado para descartar la infracción de ley denunciada.

Con relación a la infracción del artículo 161, inciso primero, del Código del Trabajo, se estará a todo cuanto se dijo al momento de rechazar el primer motivo de nulidad por cuanto se basa en los mismos fundamentos, máxime que no se invoca una errónea aplicación de la norma sino que se cuestionan fundamentos y pruebas consideradas por la sentenciadora para establecer como justificado el despido. Sin perjuicio que el ejercicio propuesto por el recurrente es improcedente desde el momento que implicaría desconocer los hechos establecidos por la sentenciadora, en particular, según el considerando octavo de su fallo, que «el concejo llevo a cabo durante a lo menos es segundo semestre del año 2019 un análisis de la condiciones de gestión de la fundación, así como también de carácter económico, puesto que se ha preocupado de elaborar a octubre del año pasado una propuesta de reestructuración, lo que evidencia el trabajo anterior en este sentido que solo culmina con el documento». Razón por la que no puede prosperar este motivo de nulidad.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 456, 477, 478, 480, 481 y 482 del Código del Trabajo, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad interpuesto por el abogado Ignacio Álvarez Vera, en representación de SERGIO NESTOR VILLARROEL ANDRADE, ERICO ALEJANDRO DELGADO URIBE y CESAR DANIEL ANDRADE SEGOVIA, en los autos en procedimiento de aplicación general, caratulados “ANDRADE Y OTROS CON FUNDACIÓN ALMIRANTE CARLOS CONDELL”, Causa RIT O-55-2020, en contra de la sentencia definitiva de 23 de octubre de 2020, dictada por la Juez Titular del Trabajo de Castro doña Carolina Emilia Pardo Lobos, sentencia que en consecuencia no es nula. Sin costas de la instancia.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro don Patricio Rondini Fernández-Dávila.

**Rol 330-2020 TRAB.**





XXXXXXXXXX

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministra Presidente Gladys Ivonne Avendaño G., Ministro Juan Patricio Rondini F. y Abogado Integrante Mauricio Antonio Cardenas G. Puerto Montt, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.

En Puerto Montt, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

